

RE: JOSE RODRIGO PARRADO ARDILA CONTRA COLPENSIONES. RADICADO: 11001310501520230038200. CONTESTACION DEMANDA

Asistente Administrativo2 <asistenteadministrativo2@utdefensapensiones.com.co>

Jue 8/02/2024 10:54 AM

Para: Juzgado 15 Laboral Circuito - Bogotá - Bogotá D.C. <jlato15@cendoj.ramajudicial.gov.co>; gina_carolina@yahoo.com <gina_carolina@yahoo.com>

 1 archivos adjuntos (779 KB)

JOSE RODRIGO PARRADO ARDILA - CONTESTACION DEMANDA.pdf;

Señor

JUEZ 15 LABORAL DEL CIRCUITO

Bogotá D.C.

En mi calidad de apoderada judicial sustituta de la Administradora Colombiana de Pensiones – COLPENSIONES-, conforme a la sustitución otorgada por la Doctora MARCELA PATRICIA CEBALLOS OSORIO, en su calidad de apoderada de COLPENSIONES conforme la Escritura Pública No. 1520 del 18 de mayo de 2023, respetuosamente me permito adjuntar escrito de CONTESTACION DE DEMANDA CORREGIDA UNICAMENTE en lo que respecta al radicado del proceso, ya que por error se digitó un radicado que no corresponde al caso en concreto.

Cordialmente,

DIANA MARCELA CUELLAR SALAS

Abogada

De: Asistente Administrativo2

Enviado: miércoles, 7 de febrero de 2024 16:33

Para: Juzgado 15 Laboral - Bogotá - Bogotá D.C. <jlato15@cendoj.ramajudicial.gov.co>; gina_carolina@yahoo.com <gina_carolina@yahoo.com>

Asunto: JOSE RODRIGO PARRADO ARDILA CONTRA COLPENSIONES. RADICADO: 11001310501520230038200. CONTESTACION DEMANDA

Señor

JUEZ 15 LABORAL DEL CIRCUITO

Bogotá D.C.

En mi calidad de apoderada judicial sustituta de la Administradora Colombiana de Pensiones – COLPENSIONES-, conforme a la sustitución otorgada por la Doctora MARCELA PATRICIA CEBALLOS OSORIO, en su calidad de apoderada de COLPENSIONES conforme la Escritura Pública No. 1520 del 18 de mayo de 2023, respetuosamente me permito adjuntar escrito de CONTESTACION DE DEMANDA.

Cordialmente,

DIANA MARCELA CUELLAR SALAS

Abogada



Señor (a)

JUEZ QUINCE LABORAL DEL CIRCUITO DE BOGOTÁ D.C.

E. S. D.

Referencia: PROCESO ORDINARIO LABORAL
Demandante: JOSE RODRIGO PARRADO ARDILA C.C. 3.140.102
Demandados: ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES
"COLPENSIONES" Y OTROS.
Radicado: No. 11001310501520230038200
Asunto: CONTESTACIÓN A LA DEMANDA

DIANA MARCELA CUELLAR SALAS, mayor de edad, domiciliada y residente Florencia Caquetá, identificada con la cédula No 1.075.210.176 expedida en Neiva abogado en ejercicio, titular de la tarjeta profesional No. 283.663 expedida por el Consejo Superior de la Judicatura, en mi calidad de apoderada judicial sustituta de la Administradora Colombiana de Pensiones – COLPENSIONES-, conforme a la sustitución otorgada por la Doctora **MARCELA PATRICIA CEBALLOS OSORIO**, en su calidad de apoderada de COLPENSIONES conforme la Escritura Pública No. 1520 del 18 de mayo de 2023. En mi condición de abogada externa, solicito al Despacho reconocermé personería para actuar, y estando dentro del término legal de manera respetuosa me permito dar contestación a la demanda ordinaria laboral del proceso instaurado por el señor **JOSE RODRIGO PARRADO ARDILA** contra la Administradora Colombiana de Pensiones - COLPENSIONES; en los siguientes términos:

I. NATURALEZA JURÍDICA DE LA ENTIDAD DEMANDADA, Y DOMICILIO

La Administradora Colombiana de Pensiones –**COLPENSIONES**¹ es una empresa industrial y comercial del estado del orden nacional, organizada como entidad financiera de carácter especial, vinculada al Ministerio de Trabajo con personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio independiente, cuyo objeto consiste en la administración estatal del régimen de prima media con prestación definida incluyendo la administración de los beneficios económicos periódicos de que trata el **Acto Legislativo 01 de 2005** modificatorio del **artículo 48 de la Constitución Política**, de acuerdo con lo que establezca la ley que los desarrolle.

La representación legal la ejerce el Doctor **JAIME DUSSÁN CALDERÓN** identificado con la C.C. 12.102.957 o quien haga sus veces y quien obra en su calidad de presidente según consta en el **Acuerdo No. 012 del 23 de noviembre del 2022**.

El domicilio principal es la ciudad de Bogotá D.C., en la **Carrera 10 No. 72-33 Torre B piso 6, número telefónico 2170100**.

II. A LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA

De manera respetuosa, me opongo a todas y cada una de las pretensiones, declaraciones y condenas solicitadas en la demanda, de la siguiente manera:

¹ Creada mediante **Ley 1151 de 2007 en su artículo 155; Decreto-Ley 4121 de 2011**: Por el cual se cambia la naturaleza jurídica de la Administradora Colombiana de Pensiones, Colpensiones, **Decreto 2013 de 28 de septiembre de 2012**: Por el cual se suprime el Instituto de Seguros Sociales, ISS, se ordena su liquidación, y se dictan otras disposiciones. **Decreto Reglamentario 2011 de 2012**: Por el cual se determina y reglamenta la entrada en operación de la Administradora Colombiana de Pensiones – Colpensiones, y se dictan otras disposiciones.



Primero. - FRENTE A LA PRIMERA. ME OPONGO, dado que la afiliación realizada por el señor JOSE RODRIGO PARRADO ARDILA, al régimen de ahorro individual con solidaridad tiene plena validez más aún cuando no se observa algún vicio en el consentimiento dentro del acto de afiliación y se evidencia la libertad de escogencia de régimen pensional del demandante.

Segundo. - FRENTE A LA SEGUNDA, ME OPONGO, dado que la afiliación realizada por la señora JOSE RODRIGO PARRADO ARDILA, al régimen de ahorro individual con solidaridad tiene plena validez más aún cuando no se observa algún vicio en el consentimiento dentro del acto de afiliación y se evidencia la libertad de escogencia de régimen pensional del demandante.

Tercero. - FRENTE A LA TERCERA. ME OPONGO, dado que la afiliación realizada por la señora JOSE RODRIGO PARRADO ARDILA, al régimen de ahorro individual con solidaridad tiene plena validez más aún cuando no se observa algún vicio en el consentimiento dentro del acto de afiliación y se evidencia la libertad de escogencia de régimen pensional del demandante.

Cuarto. - FRENTE A LA CUARTA, ME OPONGO, dado que la afiliación realizada por la señora JOSE RODRIGO PARRADO ARDILA, al régimen de ahorro individual con solidaridad tiene plena validez más aún cuando no se observa algún vicio en el consentimiento dentro del acto de afiliación y se evidencia la libertad de escogencia de régimen pensional del demandante.

Quinto. - FRENTE A LA QUINTA, , ME OPONGO, en atención a que la Administradora Colombiana de Pensiones – Colpensiones ha actuado apegada a las disposiciones normativas y reglamentarias que dirigen su actuación y el de las Entidades Públicas, en especial las que dirigen el sistema general de seguridad social, en este sentido, no hay lugar a la imposición de costas o agencias en derecho en el presente proceso, aun cuando el demandante no ha presentado prueba que permita observar los gastos en los cuales ha incurrido, al igual que no se han presentado fundamentos jurídicos que permitan endilgar cualquier tipo de responsabilidad en contra de mi representada frente a sus actuaciones.

Sexto.- FRENTE A LA SEXTA, ME OPONGO, como quiera que dicha facultad ultra y extra petita encuentran su límite en la competencia del Señor Juez, la cual a su vez está restringida por el contenido del escrito de reclamación administrativa.

III. A LOS HECHOS DE LA DEMANDA

Primero. - AL HECHO NÚMERO 1: ES CIERTO, que el señor JOSE RODRIGO PARRADO ARDILA, nació el 06 de septiembre de 1962, conforme al material probatorio aportado por el demandante.

Segundo. - AL HECHO NÚMERO 2: ES CIERTO, conforme a la Historial laboral del señor JOSE RODRIGO PARRADO ARDILA, expedida por mi representada.

Tercero. - AL HECHO NÚMERO 3: ES CIERTO, conforme al material probatorio presentado por el señor JOSE RODRIGO PARRADO ARDILA.



Cuarto. - AL HECHO NÚMERO 4: NO ME CONSTA, es un hecho ajeno a mi representada, por lo que no me compete afirmar o desvirtuar el mismo, de igual modo, este hecho deberá probarse en el transcurso del proceso.

Quinto. - AL HECHO NÚMERO 5: NO ME CONSTA, es un hecho ajeno a mi representada, por lo que no me compete afirmar o desvirtuar el mismo, de igual modo, este hecho deberá probarse en el transcurso del proceso.

Sexto. - AL HECHO NÚMERO 6: ES CIERTO, conforme al material probatorio presentado por el señor JOSE RODRIGO PARRADO ARDILA.

Séptimo. - AL HECHO NÚMERO 7: NO ME CONSTA, es un hecho ajeno a mi representada, por lo que no me compete afirmar o desvirtuar el mismo, de igual modo, este hecho deberá probarse en el transcurso del proceso.

Octavo. - AL HECHO NÚMERO 8: NO ME CONSTA, es un hecho ajeno a mi representada, por lo que no me compete afirmar o desvirtuar el mismo, de igual modo, este hecho deberá probarse en el transcurso del proceso.

Noveno. - AL HECHO NÚMERO 9 NO ME CONSTA, es un hecho ajeno a mi representada, por lo que no me compete afirmar o desvirtuar el mismo, de igual modo, este hecho deberá probarse en el transcurso del proceso.

Décimo. - AL HECHO NÚMERO 10: NO ME CONSTA, es un hecho ajeno a mi representada, por lo que no me compete afirmar o desvirtuar el mismo, de igual modo, este hecho deberá probarse en el transcurso del proceso.

Décimo Primero. - AL HECHO NÚMERO 11: ES CIERTO, conforme al material probatorio presentado por el señor JOSE RODRIGO PARRADO ARDILA.

Decimo Segundo. - AL HECHO NUMERO 12: ES CIERTO, conforme al material probatorio presentado por el señor JOSE RODRIGO PARRADO ARDILA.

IV. PETICIÓN ESPECIAL

En consecuencia, solicito se **ABSUELVA** a la entidad que represento en su calidad de sucesor legal del Instituto de Seguros Sociales, de todos los cargos contra ella formulados, acoguéndome para tal efecto a las anteriormente alegadas razones de la defensa, igualmente niego el derecho, causa y razón invocados por el señor JOSE RODRIGO PARRADO ARDILA.

De carácter subsidiario, solicito Señor Juez, en caso de una eventual sentencia con fallo condenatorio, respecto de la pasiva Administradora Colombiana De Pensiones – Colpensiones se ordene:

1. Dentro de los dineros que se ordenen retornar se haga la referencia a (i) dineros destinados a la cuenta individual; (ii) dineros destinados al Fondo de Garantía de Pensión Mínima; (iii) dineros destinados a la prima de reaseguros (iv) dineros destinados al seguro previsional de invalidez y sobrevivientes y (v) dineros destinados a la comisión de administración por aportes obligatorios sin descuento alguno y cualquier otro dinero destinado a seguro alguno.

2. Sea absuelta al pago de costas y agencias en derecho por cuanto mi representada no fue quien incumplió con sus respectivas obligaciones legales y sobre la misma recae



única y exclusivamente una obligación de hacer de carácter de orden emitida por el operador jurídico.

V. EXCEPCIONES DE FONDO

• PRESCRIPCIÓN Y CADUCIDAD.

Se propone la presente excepción para que tenga todos los efectos de rigor, pero sin que signifique que se esté reconociendo alguna obligación a cargo de Colpensiones, pues opera el fenómeno de la prescripción de acuerdo a los artículos 488 del código sustantivo del trabajo y 151 del código procesal del trabajo, por no haber sido reclamados los derechos que hoy se alegan dentro de la oportunidad allí establecida.

En sentencia del Honorable Tribunal Superior de Bogotá, con ponencia del Magistrado Diego Roberto Montoya Millán sala 4 de decisión a saber: Sentencia del 28 de febrero de 2018, dentro del proceso ordinario proveniente del juzgado 18 radicación 2016-712 en la que respecto al tema de la prescripción manifestó: *“Entonces si como se enuncio el 11 de febrero de 2011 se le comunico a la demandante la negativa a sus solicitud de traslado fue ese hecho el que la habilito para exigir el derecho ante la jurisdicción lo cual llevo a cabo a efecto el 5 de diciembre de 2016 (folio 20) es decir ya superado el termino trienal al que hemos hecho referencia pues atendiendo la fecha de la respuesta emitida por PORVENIR la demandante tenía hasta el 11 de febrero de 2014 para acudir a la jurisdicción, hecho que como quedo visto acaeció mucho después de dicha calenda razón por la cual se encuentra probada la excepción de prescripción frente a la ineficacia del traslado del régimen lo que derivada como consecuencia la absolución de las demandadas, pero por estas circunstancias”*

En el mismo sentido en sentencia del 02 de mayo de 2018 dentro del proceso ordinario laboral proveniente del juzgado 21 radicación 2015-1016 en la que reitero: *“Entonces si como se enuncio el 23 de julio de 2004 se le informo a la demandante las consecuencias del traslado del régimen pensional, fue ese hecho el que la habilito para exigir el derecho ante la jurisdicción, lo cual llevo a cabo el 3 de diciembre de 2015 (folio 92), es decir ya superado el termino trienal al que hemos hecho referencia; pues tenía hasta el 23 de julio de 2007 para acudir a la jurisdicción, hecho que como quedo visto acaeció mucho después de dicha calenda, razón por la cual se encuentra probada la excepción de prescripción frente a la ineficacia del traslado del régimen lo que derivada como consecuencia la absolución de las demandadas por cuanto las pretensiones relacionadas con el reconocimiento del derecho pensional en aplicación al acuerdo 049 del 90 derivaban directamente de la declaración de ineficacia de traslado a efectos de que la actora recuperara el régimen de transición”*.

• INEXISTENCIA DEL DERECHO Y DE LA OBLIGACIÓN POR FALTA DE REUNIR LOS REQUISITOS LEGALES

Tal y como se demuestra en el plenario, lo pretendido por el demandante carece de todo asidero jurídico toda vez que, su reclamación va en contravía de las normas dispuestas para ser acreedor de la nulidad de traslado, más aún, cuando deberá probarse que dicho traslado se realizó bajo algún vicio que pudiese invalidar el traslado, teniendo en cuenta en el presente caso, según nuestro órgano natural de cierre debe ser estudiada y valorada bajo la figura de la ineficacia y no la nulidad evidenciándose que con el paso del tiempo la parte actora no ha realizado actos que sugieran su no intención y/o inconformidad de pertenecer a la AFP, pues a la fecha se tiene una densidad considerable de años que no denota que las alegadas falencias, engaño, falta de información fueron sujetas de perfeccionamiento, pues no se puede concluir bajo las



máximas de la experiencia que exista un acto ineficaz homogéneo sucesivo cuantificable en décadas y percatarse de ellos solo hasta estar ad portas de la causación de la pensión de vejez.

En ese orden de ideas se entiendo que en el presente caso operó una ratificación expresa que trata el artículo 898 del C.Co que reza: *“La ratificación expresa de las partes dando cumplimiento a las solemnidades pertinentes perfeccionará el acto inexistente en la fecha de tal ratificación, sin perjuicio de terceros de buena fe exenta de culpa. Será inexistente el negocio jurídico cuando se haya celebrado sin las solemnidades sustanciales que la ley exija para su formación, en razón del acto o contrato y cuando falte alguno de sus elementos esenciales.”* (CSJ Sentencia de fecha 8 de mayo de 2019 SL1688-2019. M.P. Clara Cecilia Dueñas.)

- **IMPOSIBILIDAD JURÍDICA PARA RECONOCER Y PAGAR DERECHOS POR FUERA DEL ORDENAMIENTO LEGAL**

A COLPENSIONES le resulta jurídicamente imposible reconocer derechos violando la normatividad jurídica, pues los requisitos legalmente exigidos no pueden desconocerse sino por el contrario cumplirse rigurosamente. De acuerdo con lo anterior y teniendo en cuenta que Colpensiones en todas sus actuaciones tiene que someterse al imperio de la constitución Nacional y de la Ley, es claro que no se puede reconocer derecho que no se encuentre dentro del ordenamiento legal vigente.

Lo anterior con ocasión a lo expuesto en el acápite de las pretensiones y los fundamentos de derecho; por tanto no puede regresar al régimen de prima media con prestación definida en cualquier tiempo, pues debió hacerlo cuando le faltaba más de 10 años para cumplir con el requisito de la edad para adquirir su derecho a la pensión, pero como la solicitud la elevo cuando eran menos de 10 años para cumplir con el requisito de la edad ya no puede regresar al régimen administrado por mi representada.

El error que se alega en la presente demanda no es otra que la contenida en el artículo 1509 del código civil que expresa que el error sobre un punto de derecho no vicia el consentimiento concordante con el artículo 9 que expresa la ignorancia de las leyes no sirve de excusa, se debe entender que no existe el vicio alegado por la parte demandante.

En sentencia proferida el de marzo de 2017 proceso 07-2015-1140 Magistrada ponente Ángela Lucia Murillo: *“En consecuencia, la sala no encuentra afectado el acto voluntario y libre del traslado del régimen de prima media al régimen de ahorro individual realizado por la demandante; primero, porque con el traslado no se incurrió en ninguna prohibición legal que lo impidiera; segundo, a la fecha del traslado el demandante no tenía derechos adquiridos entendidos como aquellos que se consolidan una vez se ha cumplido todos los presupuestos normativos exigidos bajo el imperio de una ley; tercero, porque el error de derecho no es causal de nulidad de los actos que generan derechos y obligaciones; cuarto, por la voluntad de permanencia en el régimen de ahorro individual, que se reafirma con el gran número de semanas cotizadas con posterioridad a su afiliación.”*

- **COBRO DE LO NO DEBIDO.**

Por cuanto mi representada no adeuda derecho alguno al demandante por los conceptos aquí demandados de acuerdo con lo expresado en los hechos y razones de la defensa de Colpensiones.

Dado que, está acreditado que la administradora del régimen de ahorro individual con solidaridad le reconoció la pensión de vejez a la demandante, atendiendo a que, por ello,



competente a dicho fondo privado pagar la prestación que a bien tenga derecho el demandante, conforme a lo dicho dentro de la sentencia SL373-2021 Radicación n.º 84475 del 10 de febrero de 2021, la cual enmarca el postulado dentro del traslado de régimen cuando se ha reconocido la prestación al accionante y las implicaciones que acarrea a terceros, no habiendo deuda por pagar por parte de mi representada.

- **BUENA FE**

La excepción de buena fe propuesta se refiere a que la entidad que represento siempre ha actuado dentro de los parámetros legales y constitucionales, amparado en el principio de la BUENA FE tanto de esta entidad, como de las entidades y personas que acuden a ella en calidad de usuarios o afiliados y en desarrollo de lo expresado en nuestra Carta Magna artículo 83 que indica que *“las actuaciones de los particulares y de las autoridades públicas deberán ceñirse a los postulados de la buena fe la cual se presumirá en todas las gestiones que aquellos adelanten ante estas”*.

La buena fe en la labor misional de COLPENSIONES surge precisamente de la estricta aplicación de la Constitución, la Ley el precedente jurisprudencial que permite conceder a negar prestaciones ajustadas a derecho, por lo cual, existiendo la presunción de legalidad del acto que garantiza seguridad jurídica en la decisión prestacional, tal circunstancia permite revestir además bajo la égida de la buena fe el reconocimiento o negación pensional por lo que es de carga exclusiva del demandante controvertir tanto la presunción legal del acto como la buena fe en la decisión.

- **IMPOSIBILIDAD DE CONDENA EN COSTAS**

Se debe presumir la BUENA FE, a menos que se demuestre lo contrario, situación que lleva a la imposibilidad de condenar en costas con base en lo siguiente: El artículo 365 del Código General del Proceso, e igualmente aplicable al procedimiento laboral atendiendo al artículo 145 del Código Procesal del Trabajo, faculta al juez para condena en costas a la parte vencida teniendo en consideración la conducta asumida por ésta, que es una norma de carácter procesal de vigencia inmediata de acuerdo con el artículo 40 de la Ley 153 de 1887, y la reiterada jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia.

Por lo que solicito respetuosamente a su Señoría que se abstenga de condenar en costas a mi representada, toda vez que como se ha demostrado siempre ha actuado conforme a los mandatos legales y constitucionales.

- **DECLARATORIA DE OTRAS EXCEPCIONES**

Solicito a la Señora Juez que si halla probados hechos que constituyan una excepción se sirva reconocerla de oficio de conformidad con lo dispuesto en el artículo 306 del C.P.C aplicado por vía remisoria en lo laboral según lo dispuesto por el artículo 145 del CPTSS.

VI. RAZONES DE DERECHO DE LA DEFENSA

La entidad que represento siempre ha actuado de Buena fe, tanto de esta entidad como de las entidades o personas que acuden a ella en calidad de usuarios o afiliados y en desarrollo de lo expresado en nuestra carta magna artículo 83 que indica que *“las actuaciones de los particulares y de las autoridades deberán ceñirse a los postulados de buena fe, la cual se presumirá a todas las gestiones que ellos adelanten ante estas”*.



Desde la entrada en vigor de la Ley 100 del 1993, en pro de una estabilidad financiera, libertad de régimen y que los trabajadores tuvieran una garantía de pensionarse, se creó el Sistema General de Pensiones con dos regímenes coexistentes, el régimen de prima media con prestación definida y el régimen de ahorro individual con solidaridad.

La ley 100 de 1993 en su art. 13.- Características del sistema general de pensiones. El sistema general de pensiones tendrá las siguientes características literal b) “...La selección de uno cualquiera de los regímenes previstos por el artículo anterior es libre y voluntaria por parte del afiliado, quien para tal efecto manifestará por escrito su elección al momento de la vinculación o del traslado. El empleador o cualquier persona natural o jurídica que desconozca este derecho en cualquier forma, se hará acreedor a las sanciones de que trata el inciso 1º del artículo 271 de la presente ley...”

En relación con la norma anterior, ha señalado la Corte Constitucional en Sentencia C-789-02 que:

“...Es importante resaltar que tanto los trabajadores del sector público y privado pueden elegir libremente entre cualquiera de estos dos regímenes que estimen más conveniente...”

La jurisprudencia del órgano natural de cierre del presente caso ha establecido en reiteradas ocasiones que la autonomía de la voluntad privada es “...la facultad reconocida por el ordenamiento positivo a las personas para disponer de sus intereses con efecto vinculante y, por tanto, para crear derechos y obligaciones, con los límites generales del orden público y las buenas costumbres, para el intercambio de bienes y servicios o el desarrollo de actividades de cooperación...Dentro de este cuadro, la autonomía permite a los particulares: i) celebrar contratos o no celebrarlos, en principio en virtud del solo consentimiento, y, por tanto, sin formalidades, pues éstas reducen el ejercicio de la voluntad; ii) determinar con amplia libertad el contenido de sus obligaciones y de los derechos correlativos, con el límite del orden público, entendido de manera general como la seguridad, la salubridad y la moralidad públicas, y de las buenas costumbres; iii) crear relaciones obligatorias entre sí, las cuales en principio no producen efectos jurídicos respecto de otras personas, que no son partes del contrato, por no haber prestado su consentimiento, lo cual corresponde al llamado efecto relativo de aquel...”

Del análisis del escrito de demanda, se colige que la parte actora gozaba de plena autonomía para cambiarse de régimen, lo cual demuestra que: primero, el afiliado era consciente sobre el formulario que suscribió para cambio de régimen y segundo, que la elección del régimen y de la administradora se llevó a cabo de manera libre, espontánea y sin presiones dejando sin certeza lo estipulado en el escrito de demanda.

La Corte Constitucional en Sentencias C-086 de 2016, cuyo Magistrado Ponente fue el Doctor Jorge Iván Palacio Palacio, del cual se refirió frente a la carga dinámica de la prueba como: “(...) En ese orden de ideas, considero que no hay lugar a atribuir un carácter excepcional a la carga dinámica de la prueba prevista en la norma acusada, porque en ocasiones los jueces se enfrentan a circunstancias en las que la desigualdad entre las partes del proceso exige que se distribuyan las cargas y en esos casos la inversión de la carga probatoria será la regla general aplicable. Así pues, en algunos casos el operador judicial tiene el deber de hacer efectiva la igualdad de armas en el proceso y la realización de este deber no es una excepción, sino constituye la regla general (...)”, a fin de demostrar el objeto que llevo a la iniciación del proceso judicial, teniendo claro que esta deberá repartirse con el fin de obtener la igualdad de armas dentro del litigio.



Ahora bien, dentro de la Sentencia 1025 de 2007, la misma honorable Corte, describe la óptica de las instituciones en protección de los derechos y libertades de todas las personas: “(...) Desde la óptica de las instituciones, ese acercamiento se requiere para poder cumplir con su responsabilidad constitucional y legal de garantizarle a los miembros de la Comunidad el goce de sus derechos. Y desde la perspectiva de la Comunidad de Paz porque, por paradójico que pueda parecer, la vigencia de los derechos de sus miembros depende de la manera en que logre articularse con las instituciones del Estado. Esto exige, a su vez, que las instituciones colombianas comprendan que su papel en la zona es el de proteger los derechos y libertades de todas las personas, incluidos los miembros de la Comunidad de Paz. Este entendimiento acerca de su misión en la región es el que debe guiar todas las decisiones y acciones que realicen allí (...)”, protección del cual es garante el Estado por mandato constitucional y del cual gozan todas las personas, como lo es en el presente caso, el derecho que tiene el actor a trasladarse de régimen de manera libre y voluntaria.

De igual manera, la Honorable Corte Constitucional realizó un pronunciamiento dentro de la Sentencia C-596 de 2007, en la cual muestra un análisis dentro del principio de favorabilidad con referencia en los regímenes anteriores y en la cual adujo: “La violación del principio de favorabilidad laboral que se plantea en la demanda, se estructura por la comparación entre el nuevo régimen y el régimen derogado, por lo cual carece de fundamento, ya que no estando de por medio derechos adquiridos, al legislador le es permitido definir libremente los requisitos para acceder a un derecho-prestación de contenido económico-social, tal cual es el derecho a la pensión de jubilación. En ese sentido, la Corte en Sentencia C-126 de 1995 (M.P. doctor Hernando Herrera Vergara), (...)”.

De acuerdo con lo anterior, y a la validez del traslado efectuado, la parte actora no podrá retornar al régimen de prima media, por ausencia clara de requisitos legales y jurisprudencias para su procedencia, en otras palabras, no es posible su traslado porque de acuerdo con lo previsto en la ley y especialmente las sentencias C -1024 de 2004, SU 062 de 2010 y SU 130 DE 2013, lo que imposibilita legalmente su traslado al régimen de prima media con prestación definida.

Al respecto, la sentencia C 1024 de 2004 establece: “...Aquellas personas que habiendo cumplido el requisito de quince (15) años o más de tiempos cotizados al momento de entrar en vigencia el sistema de seguridad social en pensiones cuando previamente se hubiesen trasladado al régimen de ahorro individual solidaridad, tienen el derecho de regresar -en cualquier tiempo- al régimen de prima media prestación definida, con el propósito de preservar la intangibilidad de su derecho Pensionarse conforme al régimen de transición. Siendo el derecho al régimen un derecho adquirido, no puede desconocerse la potestad reconocida a las normas previstas en las hipótesis normativas de los incisos 4° y 5° del artículo 36 de la ley 100 de 1993, de retomar en cualquier tiempo al régimen de prima media con prestación definida y, por lo mismo, hacer efectivo su derecho pensional con fundamento en disposiciones que le resulten más benéficas...”

Igualmente expresó: “**...En relación con el Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad, en particular, considero inequitativo que personas que no han contribuido con el pago de la prima para el seguro previsional de invalidez y sobrevivencia, se beneficien de las utilidades derivadas de esta mutualidad constituida para amparar dichos riesgos y para incrementar el capital acumulado por cada afiliado. Así mismo calificó de injusto que una persona que no ha contribuido a la constitución del fondo común del Régimen de Prima Media con Prestación Definida, se beneficie y resulte subsidiado por las cotizaciones de los demás...**” (Negrilla fuera de texto)



Lo anterior lo ratificado la Honorable Corte en las Sentencias C-086 DE 2016; C-1024 DE 2004; C-1025 de 2007; C-789 DE 2002; C-596 de 1997; SU 130 de 2013; SU 062 de 2010.

Así mismo, pronunció expresamente en el sentido de reiterar que los beneficiarios del régimen de transición por edad (35 años o más si son mujeres o 40 más si son hombres) pierden automáticamente los beneficios de dicho régimen al trasladarse voluntariamente al Régimen de ahorro individual con solidaridad.

Aunado a lo anterior, la Corte consideró acordes con la Constitución las disposiciones que suscriben que la protección de régimen de transición se extingue cuando la persona se acoge régimen de ahorro individual o se traslada a él, aclaró que las normas expresamente circunscriben tal consecuencia a sólo dos de los tres grupos de personas amparan el régimen de transición: (i) mujeres mayores de treinta y cinco y (ii) los hombres mayores de cuarenta. Por tanto, las personas que contaban con quince años de servicios cotizados para el 1 de abril de 1994 no pierden los beneficios del régimen de transición al escoger el régimen de ahorro individual o al trasladarse al mismo, lo que se traduce en que, una vez efectuado traslado al régimen de prima media, pueden adquirir su derecho pensional de acuerdo con las normas anteriores a la ley 100 de 1993.

Por su parte, la sentencia T 060 de 2011: *“...Esta Corporación ha sido enfática en señalar que la persona que cumplió con el requisito de haber cotizado 15 años o que prestó sus servicios al Estado durante un periodo igual con antelación al 1 de abril de 1994, tendrá derecho a recuperar el régimen transición conforme a las leyes que precedieron a la Ley 100 de 1993, en cualquier tiempo; sin consideración a la edad que tuviera para la fecha en que entró a regir dicha normatividad. De igual manera, pueden regresar al régimen de prima media las personas que se trasladaron de régimen y que sólo cumplían con el requisito de la edad, pero en este evento no se pensionarán conforme a la legislación que regía las prestaciones sociales con anterioridad a la ley 100 de 1993, sino que su pensión será reconocida bajo los lineamientos de la ley de seguridad social que empezó a regir el 1o de abril de 1994...”*

De esta manera, la Corte Constitucional ha dejado claramente establecido que las únicas personas amparadas por el régimen de transición que quieren retornar en cualquier tiempo al régimen de prima media, con el fin de pensionarse de acuerdo con las normas anteriores a la Ley 100 de 1993 son aquellas que tengan 15 años de servicios cotizados al 1 de abril de 1994.

En atención a lo anterior y frente al caso del señor JOSE RODRIGO PARRADO ARDILA luego de verificada la historia laboral expedida por mi representada, se evidenció que no contaba con semanas cotizadas al 01 de abril de 1994 al RPMC, cumulo insuficiente para ser amparado por el régimen de transición, ahora bien, en la actualidad tiene una edad de 61 años y para dicha fecha tuvo una edad de años atendiendo a que nació el día 6 de septiembre de 1962, concluyéndose así que no es beneficiario del régimen de transición, que exige una edad de 10 años para los hombres.

De igual modo, luego de verificar la Historia Laboral, se constató que la demandante registra un total de (70,71) semanas de cotización al Sistema General de Seguridad Social en Pensiones frente al régimen de prima media con prestación definida administrado en su oportunidad por el Instituto de Seguros Sociales hoy la Administradora Colombiana de Pensiones – Colpensiones.

De otro lado, observado el caso del demandante el señor JOSE RODRIGO PARRADO ARDILA, se evidencia que a la fecha tiene una edad de 61 años, por lo que deberá verificarse si accedió al reconocimiento pensional, en ese sentido la Sentencia proferida



por la Honorable Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, Magistrado Ponente CLARA CECILIA DUEÑAS QUEVEDO, SL373-2021 Radicación n.º 84475, expuso:

“Si se trata de una garantía de pensión mínima, volver las cosas a su estado anterior, implicaría dejar sin piso los actos administrativos que mediaron en el reconocimiento de la garantía. Como La Nación asume el pago de dicha prerrogativa, se requería la intervención de la Oficina de Bonos Pensionales del Ministerio de Hacienda y Crédito Público para que defiendan los intereses del Estado que se verían afectados por la ineficacia del traslado de una persona que ya tiene el status de pensionado. Esto a su vez se encuentra ligado a lo dicho acerca de los bonos pensionales, pues la garantía se concede una vez esté definido el valor de la cuenta de ahorro individual más el bono.

Ni que decir cuando el capital se ha desfinanciado, especialmente cuando el afiliado decide pensionarse anticipadamente, o de aquellos casos en que ha optado por los excedentes de libre disponibilidad (art. 85 de la Ley 100 de 1993), en virtud de los cuales recibe la devolución de una parte de su capital ahorrado. En esta hipótesis, los recursos, ya desgastados, inevitablemente generarían un déficit financiero en el régimen de prima media con prestación definida, en detrimento de los intereses generales de los colombianos.

La Corte podría discurrir y profundizar en muchas más situaciones problemáticas que generaría la invalidación del estado de pensionado. No obstante, considera que los ejemplos citados son suficientes para demostrar el argumento según el cual la calidad de pensionado da lugar a una situación jurídica consolidada y a un hecho consumado, cuyos intentos de revertir podría afectar derechos, deberes, relaciones jurídicas e intereses de un gran número de actores del sistema y, en especial, tener un efecto financiero desfavorable en el sistema público de pensiones” (subrayado fuera de texto).

La jurisprudencia relacionada nos trae el caso en el cual ya se le reconocido la calidad de pensionado al demandante, caso que aplica dentro del presente asunto puesto que se están en riesgo recursos y afectación a terceros que invocarían una lesión al patrimonio público, en caso de que se hubiese reconocido y validado la prestación por parte del fondo privado administrador del régimen de ahorro individual con solidaridad al cual se encuentra pensionado el demandante.

La posibilidad de traslado de regímenes de pensión está contemplada por el literal e, del artículo 2 de la ley 797 de 2003, que modifica el artículo 13 de la ley 100 reza: *Los afiliados al Sistema General de Pensiones podrán escoger el régimen de pensiones que prefieran. Una vez efectuada la selección inicial, estos sólo podrán trasladarse de régimen por una sola vez cada cinco (5) años, contados a partir de la selección inicial. Después de un (1) año de la vigencia de la presente ley, el afiliado no podrá trasladarse de régimen cuando le faltaren diez (10) años o menos para cumplir la edad para tener derecho a la pensión de vejez;* Texto subrayado declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-1024 de 2004, exclusivamente por el cargo analizado en esta oportunidad y bajo el entendido que las personas que reúnen las condiciones del régimen de transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y que habiéndose trasladado al régimen de ahorro individual con solidaridad, no se hayan regresado al régimen de prima media con prestación definida, pueden regresar a éste en cualquier tiempo, conforme a los términos señalados en la sentencia C-789 de 2002.

Ahora bien, respecto de la nulidad es imperioso destacarle al Despacho que cualquier declaración de nulidad como acto jurídico estaría actualmente prescrita conforme lo dispone el artículo 1750 del Código Civil reza en lo pertinente lo siguiente: *“El plazo pedir la rescisión durará cuatro años. Este cuatrienio se contará en caso violencia, desde el día en que ésta hubiera cesado; en el caso de error se contará desde día de la celebración del acto o contrato.”*



La posibilidad de declarar la nulidad de la afiliación al Régimen de Ahorro individual con Solidaridad se encuentra sencillamente prescrita pues se desprende de la circunstancia de que se ha superado el plazo de los tres años previsto en el artículo 151 del CPTSS o bien el de cuatro años previsto en el artículo 1750 del Código Civil en el caso de las nulidades relativas de los actos jurídicos, circunstancia a la que sin ninguna duda se asimilaría el consentimiento viciado cuya aplicabilidad al menos en los asuntos laborales ha sido admitida por la jurisprudencia nacional: *“...La nulidad absoluta se reduce a las causales contenidas en el artículo 1741 ibídem, esto el objeto ilícito, la causa ilícita, la omisión de ciertos actos o actos o contratos en consideración de la naturaleza de ellos y la incapacidad absoluta, mientras que en relación con la nulidad relativa esa misma disposición dispuso en su inciso final cualquiera especie de vicio produce nulidad relativa y da derecho a la rescisión del acto o contrato lo que se predica como derivados de una incapacidad relativa o incapacidades particulares como por ejemplo, las que impone la ley a ciertas personas para ejecutar algunos actos, los emanados del consentimiento, valga decir, el error, el dolo y la fuerza, lesión enorme en ciertos casos, etc. Es del caso agregar, que de haber existido un vicio que diera lugar a la única nulidad que sería posible para el caso particular, esto es, la relativa, estaría vencido el plazo de cuatro años para pedir la rescisión o nulidad de contrato previsto en el artículo 1750 ibídem...”* (CSJ Sala de Casación Laboral, sentencia de julio 14 de 2004, radicación 22.125. MP. Luis Javier Osorio López).

En consecuencia, no puede alegarse la nulidad de la afiliación efectuada ante este Fondo de Pensiones, ya que como es bien sabido, no puede trasladarse un contrato de vinculación solo por el hecho de advertir posteriormente inconformidades con las normas y lineamientos propios del régimen de ahorro Individual y más aún cuando se ha reconocido la prestación económica.

En efecto frente al tema de las nulidades es preciso tener en cuenta que la nulidad es una situación genérica de invalidez del acto jurídico, que provoca acto jurídico- acto administrativo o acto judicial dejando sin efectos jurídicos, retro trayéndose al momento de su celebración. Entonces para que una norma o acto sean nulos se requiere de una declaración de nulidad, sea expresa o tácita. La declaración de nulidad busca proteger intereses que resultan vulnerados por las prescripciones legales al celebrarse un acto jurídico.

En el artículo 889 del Código Civil, dispone que *“será nulo absolutamente el acto jurídico en los siguientes casos: Cuando contraria una norma Imperativa, salvo que la ley disponga otra cosa; cuando tenga causa u objeto ilícitos, y Cuando se haya celebrado por persona absolutamente incapaz.”*

Lo que significa que, la nulidad absoluta es aquella que se produce por un objeto o causa ilícita o por la omisión de algún requisito o formalidad que las leyes suscriben para el valor de ciertos actos o contratos en consideración a la naturaleza de ellos y no la calidad del estado de las personas que los ejecutan celebran. La nulidad relativa es la que se produce por cualquier otra especie de acto y da derecho a la rescisión del acto o contrato. El artículo 1741 del Código Civil, dispone: *“La nulidad producida por un objeto o causa ilícita, y la nulidad producida por la omisión á requisito o formalidad que las leyes prescriben para el valor de ciertos actos contratos en consideración a la naturaleza de ellos, y no a la calidad o estado de las personas que los ejecutan o acuerdan, son nulidades absolutas. Hay así misma nulidad absoluta en los actos y contratos de personas absolutamente incapaces. Cualquiera otra clase produce nulidad relativa, y da derecho a la rescisión del acto o contrato.”*

Los vicios del consentimiento, siguiendo la lectura del Artículo 1508 del Código Civil con el error, la fuerza y el dolo es importante realizar un análisis de los elementos del anterior artículo pues, la parte actora manifiesta como regla principal que fue inducida por el



supuesto error al que fue sometido por parte del promotor comercial, al no informarle unos presuntos beneficios que la parte actora creía tener y otras más. En cuanto al vicio del dolo, es necesario que se demuestre con pruebas la supuesta conducta maliciosa, máxime si se tiene en cuenta, que el dolo no se presume sino en los casos establecidos en la ley, y que en los demás casos debe probarse tal como establece el Artículo 1516 del Código Civil precitado.

De lo anterior, es de gran importancia expresar que el error en derecho no vicia el consentimiento contractual tal como lo expresa el artículo 509 del código civil: **ARTÍCULO 1509. <ERROR SOBRE UN PUNTO DE DERECHO>. El error sobre un punto de derecho no vicia el consentimiento.**

En sentencia del 18 de mayo de 2010, el Juzgado 5 laboral del circuito de Bogotá al estudiar un caso similar al presente, señaló que: *“Como se trata de comprobaciones subjetivas, es necesario entonces tener en cuenta las circunstancias específicas de cada parte, para deducir si las maniobras fueron elaboradas de una parte y sí tenían la capacidad suficiente de engañar adicionalmente se requiere que las argucias o maniobras empujadas por la parte sean contrarias al orden social, la buena fe, la moral y las buenas costumbres, y ante la presencia de dichas maniobras la parte afectada no hubiera contratado...Ahora es preciso referir que los vicios del consentimiento, error, fuerza y dolo, no son de origen abstracto sino que deben provenir de hechos que de manera clara afecten el consentimiento de modo que de no existir ellos, la declaración de voluntad no se habría siendo imperioso para los actores acreditar su causación y efectos, a fin de dar prosperidad a las pretensiones de la demanda...Un principio general del derecho, que la ignorancia de la ley no sirve de excusa desconocimiento o ignorancia de los preceptos legales y la presunta falta de información por parte de las administradoras, no puede ser considerada como un acto que amerite la declaración del dolo como vicio del consentimiento...”*. (William Garcés vs. PORVENIR S.A.)

Así las cosas, no hay razón a que se declare la nulidad de afiliación al régimen de ahorro individual con solidaridad del señor JOSE RODRIGO PARRADO ARDILA en razón a que la afiliación tiene plena validez y legalidad puesto que no se probó por parte de la accionante alguna de las causales de nulidad, vicios de consentimiento (error, fuerza y dolo), sino que por el contrario, la parte actora confesó que el demandante se afilió y traslado sus aportes al régimen de ahorro individual administrado por Fondos Privados, por lo tanto, existió voluntad de trasladarse de régimen pensional, máxime cuando duró más de 24 años realizando aporte continuos a fondos privados.

Ahora bien, es claro que la primera afiliación a un fondo privado, esto es; **SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE PENSIONES Y CESANTIAS PROTECCION Y COLFONDOS S.A.**, acaeció desde el año 2000, según el material probatorio obrante en el expediente, por ende encontrándonos a más de 23 años después, es pertinente mencionar que el transcurso del tiempo subsana cualquier tipo de error que hubiese podido suceder, pues el demandante nunca dejó de cotizar, y no se observa que durante estos años haya presentado algún tipo de queja o reclamo en relación con su traslado de régimen o falsas promesas como argumenta su defensa.

Por lo que, se concluye que la **SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE PENSIONES Y CESANTIAS PROTECCION Y COLFONDOS S.A.**, como su fondo actual, quien tiene la obligación de verificar si el interesado cumple o no con los requisitos establecidos en la sentencia SU 062 de 2010 para aprobar el traslado al Régimen de Prima Media, administrada hoy por mi representada, Colpensiones que, de ser aprobado dicho traslado, la entidad realizará el respectivo estudio pensional.



En consecuencia, solicito se **ABSUELVA** a la entidad que represento de todos los cargos contra ella formulados, igualmente niegue el derecho, causa y razón invocados por el señor JOSE RODRIGO PARRADO ARDILA.

VII. PRUEBAS QUE SE PRETENDEN HACER VALER DENTRO DEL PRESENTE PROCESO ORDINARIO LABORAL

Solicito al despacho se decreten y tengan como pruebas, las mismas aportadas por la demandante y que ya obran en el expediente.

- Expediente Administrativo e Historia Laboral del demandante.
- CONFESIÓN MEDIANTE INTERROGATORIO DE PARTE. Comedidamente solicito Señora Juez se sirva decretar y señalar fecha y hora para practicar interrogatorio de parte, que verbalmente o mediante sobre cerrado que allegaré en su oportunidad, a la señora JOSE RODRIGO PARRADO ARDILA.

De igual modo, solicito a su Despacho oficiar a las **SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE PENSIONES Y CESANTIAS PROTECCION Y COLFONDOS S.A.**, a fin de que certifique:

- i) Si la demandante ostenta la calidad de pensionado en dicho régimen privado, o si ya cumplió los requisitos que le otorgan el estatus pensionado pese a no encontrarse percibiendo aún la pensión.
- ii) Cuáles fueron todas las operaciones y contratos financieros que se celebraron y ejecutaron con terceros para consolidar el soporte financiero del pensionado, y se alleguen los respectivos soportes que lo acreditan.
- iii) Se certifique y allegue los soportes atinentes al trámite de emisión y expedición de bonos pensionales en el caso de la demandante.

VIII. ANEXOS

- Sustitución de poder.
- Escritura Pública.
- Cedula y Tarjeta Profesional de la Abogada MARCELA PATRICIA CEBALLOS OSORIO.
- Cédula y Tarjeta Profesional de la suscrita.

IX. NOTIFICACIONES

A la demandante en la dirección aportada al proceso.

LA PARTE DEMANDADA: Como apoderado judicial recibo notificaciones en la secretaria de su Despacho o en la calle 24 No. 7-43 torre 7/24 oficina 705, correo electrónico: utdefensapensionesdianacuellar@gmail.com

La entidad demandada, COLPENSIONES, recibe notificaciones en la carrera 10 No 72-33 Torre B piso 11 de la ciudad de Bogotá D.C.

Respetuosamente,



U.T. DEFENSA PENSIONES

901.713.434-1

Diana Marcela Cuellar S.

DIANA MARCELA CUELLAR SALAS

C.C. 1.075.210.176

T.P.No. 207.121 del C.S. de la J.